



Entrevista con el líder de Ciudadanos en Movimiento: Tudor es mi amigo, pero no conozco ninguna mafia rumana: López Salazar

(Juan Omar Fierro, pág. 29-31)

El dirigente de la asociación política Ciudadanos en Movimiento, Israel López Salazar, niega cualquier relación de negocios –clonación de tarjetas– con la llamada Mafia Rumana, aunque reconoce que tiene amistad con el empresario Florian Tudor.

En entrevista con Proceso tras ser incluido por el diario Milenio en una red que presuntamente operaba para Tudor –quien ha negado estar implicado en cualquier acto ilícito y acusó al exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, de iniciar una persecución en su contra–, López Salazar afirma que se está usando su nombre para atacar la candidatura de Dolores Padierna a la alcaldía de Cuauhtémoc y niega que en la actualidad tenga una relación política o laboral con René Bejarano, esposo de la diputada federal.

Según Milenio, López Salazar usó sus fotografías en la toma de posesión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para defraudar a personas a las que promete cargos en la administración pública, acusación que él rechaza.

Relata que aun cuando fue parte del Movimiento Nacional por la Esperanza, que dirige Bejarano, la relación política se rompió cuando fue acusado de un presunto fraude en Quintana Roo. Los denunciantes se desistieron de dicha imputación al acreditarse que el vehículo prestado por ellos a la campaña política e Morena en 2018 pertenecía a una tercera persona, que solicitó su devolución. “Los defraudadores fueron ellos, por eso tuvieron que desistirse de la denuncia penal”, explica el entrevistado.

Lamenta que Bejarano no le haya dado oportunidad de defenderse hace dos años y que ahora esté pasando por lo mismo, por lo que pide analizar el trasfondo político de las nuevas acusaciones y solicita frenar la “cacería de brujas” contra él y Padierna.

Añade que, así como ha colaborado con Bejarano, también apoyó la campaña de Marcelo Ebrard cuando compitió por la Jefatura de Gobierno en 2006 y la precandidatura de Ricardo Monreal al gobierno de la Ciudad de México en 2018, además de las aspiraciones políticas de Alejandro Rojas Díaz-Durán, cercano a Monreal, que buscaba ser candidato de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc.

Asegura López Salazar que hasta el momento no ha sido notificado de ninguna investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República ni por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, derivado de sus presuntos vínculos personales con Tudor.



Aclara que a pesar de su amistad con éste, cada quien emprenderá su propia defensa, no van a compartir representantes legales. Además, pide acabar con las “politiquerías baratas” que dañaron su reputación personal y pusieron en peligro a su familia.

“Me da mucha tristeza cómo apro-vechan sus politiquerías baratas y sus inventos de participación en mafias inventadas; no tengo ninguna relación comercial ni de interés con ningún rumano. No conozco a ninguna mafia rumana”, asevera.

Dice que no piensa comparecer ante ninguna fiscalía estatal o federal mientras no sea notificado de una indagatoria en su contra. “No he sido notificado de una investigación, y como no tengo miedo de nada y no estoy relacionado con ninguna organización delictiva, ni ningún grupo, no tengo por qué esconderme”.

Ante "ataques" de AMLO, jueces y magistrados recurren a la ONU (Juan Omar Fierro, pág. 6-10)

CIUDAD DE MÉXICO.— Litigantes, jueces y magistrados de México han establecido contacto con el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, ante lo que consideran una de las mayores amenazas a la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF) en los últimos 25 años.

Agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), los impartidores de justicia han solicitado a García-Sayán dar seguimiento a los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra un juez especializado en competencia económica que suspendió de forma definitiva la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

El fallo del juez Juan Pablo Gómez Fierro provocó la molestia del titular del Ejecutivo Federal, quien emprendió una reforma legal para fortalecer las facultades del Estado en detrimento de la participación privada, a pesar de que apenas el 3 de febrero pasado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció contra la participación monopólica del Estado en el mercado de energía eléctrica.

Tras la andanada del presidente contra el juzgador federal, los jueces y magistrados mexicanos advierten que la amenaza no sólo radica en el uso de la conferencia matutina de López Obrador para exponer, de manera sesgada, los fallos incómodos del juez segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, sino también en la propuesta gubernamental de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial del propio PJF.



Según los impartidores de justicia, esas normas establecen márgenes “muy discrecionales” para la suspensión y cambio de residencia, conocida como readscripción, de los impartidores de justicia. Las modificaciones, además, prevén eliminar la jubilación en caso de que los ministros en retiro reciban honorarios, como es el caso del ministro en retiro José Ramón Cossío, a quien el presidente acusó de actuar contra su gobierno y ser parte de los abogados que promovieron los amparos contra su reforma eléctrica.

Recibida por el Senado el pasado viernes 12, el gobierno de López Obrador pretende que esas iniciativas de ley se aprueben en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que concluye el 30 abril.

Los jueces y magistrados federales ven esa prisa como un intento de aprobar una reforma sin realizar consultas a los integrantes del PJJ ni a otros operadores del sistema de justicia, con el riesgo que esto representa para la independencia judicial a escala federal. Ese peligro ha sido advertido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por los impartidores de justicia.

Sin embargo, en declaraciones públicas, Zaldívar ha negado que exista cualquier intromisión del Ejecutivo en la vida interna del Poder Judicial de la Federación.

El "corredor de la muerte" en Guanajuato

(Verónica Espinosa, pág. 38-40)

Celaya, Gto.– Enterrados en periodos distintos, sin coincidencia en las formas de inhumación, con disparidades en las edades de las víctimas: así son las fosas clandestinas halladas en cuatro municipios de ésta, la región sur del estado, convertida en un “corredor de la muerte”.

Salvatierra, Acámbaro, Cortazar y Celaya, todos municipios vecinos, son en este caso paradas funestas en el peregrinar de familiares y colectivos que buscan a cientos de víctimas de desaparición en Guanajuato.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), los restos de unas 230 personas han sido recuperados en cuatro puntos de estos municipios, ubicados por los mismos colectivos en sólo seis meses.

Este periodo abarca el inicio de búsquedas en campo que para los 12 colectivos ya constituidos en el estado apenas están empezando.

En el más reciente descubrimiento, un muy extenso predio en la loma donde termina la comunidad El Sauz de Villaseñor, en Celaya, hay indicios de que se podría superar el número de los encontrados antes en Salvatierra, Acámbaro y Cortazar, dice a Proceso la titular de la CNB, Karla Quintana Osuna.



Del 20 de febrero al pasado martes 16, de este sitio se habían recuperado los esqueletos completos de 20 personas, además de otros restos (cráneos y costillas) sólo de un área aproximada de 50 metros cuadrados, de una extensión total de 15 hectáreas.

Es decir, apenas se han abierto pozos y se han obtenido hallazgos en un área que representa menos de 2% de la extensión del lugar.

“Esto va para largo... hasta el momento no tenemos plazo; creemos que va a ser un hallazgo grande”, dijo la comisionada en una visita efectuada el martes 16, en la que presenció la recuperación de tres esqueletos.

De las 15 hectáreas, casi siete han sido ya limpiadas de maleza y algunos huizaches, por lo que sobresalen claramente las decenas de banderitas amarillas y rojas que marcan los posibles puntos positivos que tendrán que ser excavados.